

El artículo 76 del Código Aeronáutico (ley 17.285) determina que las personas realicen funciones aeronáuticas a bordo de aeronaves de matrícula argentina, así como en superficie, deben poseer la certificación de su idoneidad expedida por la autoridad aeronáutica, estableciendo que su denominación, las facultades que éstos confieren y los requisitos necesarios para su obtención deben ser determinados por el reglamento respectivo.

El decreto 1.954/77, modificado por el decreto 1.900/83, clasificó los certificados de idoneidad aeronáutica en licencias y certificados de competencia, previendo que la autoridad aeronáutica debía determinar las facultades que confieren las certificaciones de idoneidad aeronáuticas a sus titulares, los requisitos particulares para su obtención, las habilitaciones especiales y certificados de competencia que sea conveniente expedir, reglamentando su otorgamiento.

Así, las personas empleadas por el explotador para desempeñar en la cabina de pasajeros funciones de seguridad y atención a los mismos deben obtener un certificado de competencia que permita una capacitación uniforme del personal aeronavegante de cada empresa.

Por todo ello y atendiendo a la importancia tarea desarrollada por el tripulante de cabina y en el entendimiento de que es el Estado el que debe velar por la seguridad del transporte aerocomercial, tomando a su cargo la determinación de los requisitos exigibles para el desarrollo de la tarea y el control de su cumplimiento y certificando la competencia de la totalidad del personal que desarrolla funciones aeronáuticas a bordo de una aeronave, la autoridad aeronáutica resolvió incorporar a los tripulantes de cabina entre quienes deben poseer el certificado de idoneidad, disponiendo que en un término de 180 días el Comando de Regiones Aéreas debía establecer los requisitos y normas complementarias.

Como consecuencia de tal resolución, el 17 de febrero de 1999, mediante la disposición 18/99, el comandante de Regiones Aéreas dispuso aprobar los requisitos para la obtención del certificado de competencia de tripulantes de cabina de pasajeros, las facultades que otorga y las obligaciones de sus titulares que se establecen en los anexos I, II y III de esa disposición.

Mediante la disposición 19/99, de igual fecha, el comandante de Regiones Aéreas aprobó e implementó el Plan de Instrucción para Tripulantes de Cabina de Pasajeros para todas las escuelas de instrucción y perfeccionamiento aeronáutico y centros de capacitación, habilitados por disposición del Comando de Regiones Aéreas para el dictado de dichos cursos.

Por la disposición 20/99 el comandante de Regiones Aéreas resolvió que para ser reconocido como tal por la autoridad aeronáutica, todo el personal que al 18 de febrero de 1999 estuviera desempeñando funciones de a bordo como tripulante de cabina de pasajeros deberá estar incluido en el listado que, con carácter de declaración jurada, debe presentar ante la Dirección de Fomento y Habilitación el explotador corres-

pondiente, para lo cual debe realizar y aprobar antes del 30 de noviembre de 1999 un curso repetitivo de la especialidad de acuerdo con lo establecido en la disposición 19/99 (CRA).

De lo hasta aquí expuesto se desprende que la Fuerza Aérea ha dictado las normas necesarias a fin de que los tripulantes de cabina cuenten con el certificado que acredite su idoneidad.

Sin embargo, a la fecha algunas de las empresas aún no han dado inicio a los trámites para que el personal reciba la instrucción establecida.

Es por ello, que resulta necesario conocer lo actuado por la autoridad aeronáutica y las empresas en cumplimiento de las resoluciones reseñadas.

Es por las razones expuestas que se solicita la aprobación del presente proyecto de resolución.

Alicia A. Castro. — Ricardo N. Vago. —
Alejandro M. Nieva. — Marcela A. Bordenave.

—A las comisiones de Transportes y de
Defensa Nacional.

19

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

LEY DE PROCREACION RESPONSABLE

Artículo 1º — Créase el Programa Nacional de Procreación Responsable, en el ámbito del Ministerio de Salud y Acción Social, con el objeto de garantizar a todos los habitantes su derecho a la salud y a decidir libre y responsablemente sus pautas reproductivas.

Art. 2º — Serán objetivos del programa:

- a) Disminuir la morbilidad materno-infantil a través de la atención integral de la salud reproductiva;
- b) Disminuir el número de abortos;
- c) Prevenir el cáncer génito-mamario;
- d) Prevenir el embarazo adolescente;
- e) Posibilitar la planificación responsable de los nacimientos, favoreciendo espacios intragenésicos adecuados;
- f) Garantizar a la población el acceso a una información completa y veraz sobre los métodos anticonceptivos existentes que garanticen la libre elección;
- g) Fomentar el potenciamiento de la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud reproductiva, sin coacción alguna pública ni privada, revirtiendo los roles estereotipados de hombres y mujeres respecto de la paternidad y maternidad responsables.

Art. 3º — Serán destinatarios del programa, que se crea por la presente ley, la población en general, especialmente mujeres y hombres en edad fértil.

Art. 4º — El Programa de Procreación Responsable, deberá garantizar la implementación de las siguientes acciones:

- a) Informar y asesorar sobre los diversos métodos de planificación familiar y sobre su efectividad, ventajas y desventajas, contraindicaciones y correcta utilización para cada caso en particular;
- b) Informar y asesorar sobre las formas de prevención de las enfermedades de transmisión sexual, especialmente sida;
- c) Prescribir, proveer y realizar las prácticas médicas necesarias para la aplicación del método elegido por el o la paciente;
- d) Realizar controles de salud y estudios previos y posteriores a la elección del método;
- e) Efectuar las prácticas de diagnóstico necesarias para la detección temprana del cáncer génito-mamario;
- f) Diseñar estrategias de comunicación y educativas, adecuadas dirigidas de manera particular a los adolescentes, dentro y fuera del sistema educativo;
- g) Articular con las instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales y comunitarias y demás organizaciones sociales representativas y con los distintos organismos oficiales involucrados, la instrumentación de acciones de educación para la salud y la sexualidad responsable de amplio impacto, teniendo en cuenta el derecho a la integridad psíquica, física y moral de todas las personas, articulando estos derechos con el goce de sus derechos sexuales;
- h) Brindar capacitación permanente con un abordaje interdisciplinario a los profesionales, técnicos y agentes sanitarios o comunitarios involucrados en las prestaciones y acciones establecidas en el programa.

Art. 5º — Los métodos anticonceptivos, de carácter transitorio y reversible, que los profesionales de la salud podrán prescribir y colocar son:

- De abstinencia periódica (Billings, Ogino Kaus, temperatura basal, etcétera).
- Hormonales.
- Dispositivos intrauterinos.
- Químicos.
- De barrera (femeninos y masculinos).

En todos los casos el método será elegido por la/el paciente luego de recibir la información completa por parte del profesional interviniente.

Art. 6º — La incorporación de nuevos métodos debidamente investigados deberá contar con la correspondiente aprobación del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.

Art. 7º — Serán efectores del Programa Nacional de Procreación Responsable los servicios de toco-ginecología y obstetricia de todos los establecimientos públicos y nacionales, quienes brindarán las prestaciones neces-

rias para efectivizar los objetivos del programa sin cargo directo para la población que no cuente con recursos para afrontarlos.

La red de atención primaria de la salud, con sus agentes sanitarios, deberá brindar información y asesoramiento, además de realizar las acciones pertinentes de prevención y detección temprana de patologías.

Art. 8º — El gasto que demande el cumplimiento del programa para el sector público se imputará a la jurisdicción 80, Ministerio de Salud y Acción Social, Programa de Procreación Responsable del presupuesto general de la administración nacional.

Art. 9º — El Ministerio de Salud y Acción Social, en su carácter de autoridad de aplicación deberá:

- a) Realizar el seguimiento y cumplimiento efectivo del Programa Nacional de Procreación Responsable;
- b) Suscribir convenios con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que cada una organice programas de procreación responsable, para los cuales percibirá las partidas del Tesoro nacional previstas en el presupuesto nacional. El no cumplimiento de los programas por parte de las jurisdicciones cancelará las transferencias acordadas. En el marco del Consejo Federal de Salud se establecerán las alícuotas que correspondan a cada jurisdicción.

Art. 10. — Las prestaciones médicas y farmacológicas incluidas en la presente ley serán incorporadas al Nomenclador Nacional de Prácticas Médicas y en el Nomenclador Farmacológico. Las instituciones de la seguridad social y de la salud las incorporarán a las coberturas en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones.

Art. 11. — El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 60 días de su promulgación.

Art. 12. — Se invita a las provincias a adherir a las disposiciones de la presente ley.

Art. 13. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Marcela A. Bordenave. — Diana B. Conti. — Enrique G. Cardesa. — Ramón H. Torres Molina. — Jorge Rivas. — Alfredo H. Villalba. — Margarita R. Stolbitzer. — Alicia Castro.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El tema de los derechos reproductivos, dentro de la perspectiva global de los derechos de salud, constituyen hoy, un asunto aún pendiente en el diseño e implementación de políticas públicas.

La incorporación a nuestra Constitución de diversos tratados internacionales, sobre derechos humanos convierte las declaraciones programáticas en derechos exigibles por parte de sus titulares.

El fundamento del programa que se crea a través del presente proyecto es dar cumplimiento al mandato expreso de nuestra Constitución, establecido en su

artículo 75 inciso 23, que establece: "Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes, sobre derechos humanos en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad".

Sin lugar a dudas uno de los derechos humanos reconocidos y consagrados es el derecho a la salud. En tal sentido la Convención sobre Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, suscribe con claridad contra la discriminación en cuanto a la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia (artículo 12, inciso 1).

Con respecto a la maternidad y la procreación, la misma define los derechos de la mujer y del hombre de la siguiente forma: "Tener acceso a servicios en materia de planificación de la familia" (artículo 14, inciso 2b) y más específicamente, "los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos" (artículo 16, inciso 1e).

Por otra parte la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, señala en el artículo 24 inciso d) asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud... y desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia.

Es así, que lo anterior resulta suficiente fundamento para entender como indispensable implementar políticas públicas que garanticen el acceso a la salud reproductiva al conjunto de la población. Una cuestión relevante, es considerar que así, como en todos los órdenes de la salud pública, en este punto, las familias de sectores carenciados son especialmente vulnerables a la ausencia de las mismas.

Cuando hablamos de salud reproductiva, hacemos referencia no sólo a regular y decidir sobre el espaciamiento de los nacimientos de nuestros hijos, sino que nos referimos a la prevención de enfermedades de transmisión sexual, a la prevención del embarazo adolescente, de la mortalidad materno-infantil, del cáncer de mamas y cuello uterino.

Sin duda, nos referimos fundamentalmente al derecho a la integridad física, implicando el derecho de toda persona a utilizar todo el potencial de salud. Se trata del derecho a la igualdad, a la diversidad y al ejercicio de la autonomía de las personas.

Nadie podrá dudar de la legitimidad del reclamo hacia el Estado exigiendo el cumplimiento de sus deberes que garanticen el pleno ejercicio de esos derechos. Es sabido que los sectores medios y altos de la sociedad han resuelto en el ámbito de la vida privada, desde larga data el número y espaciamiento de los

nacimientos. Es por lo tanto, una cuestión ineludible de equidad social garantizar el acceso a la posibilidad de elegir sus pautas procreacionales al conjunto de la población, enfrentando sin hipocresías una realidad que afecta de manera particular a las mujeres y parejas que carecen de medios para acceder al circuito médico privado y a las adolescentes que forman en este tema un sector de riesgo.

La realidad demuestra la ineficiente atención de la salud de las mujeres y de la población en general, que se manifiesta a través de indicadores alarmantes.

Los índices de mortalidad materna son sensiblemente superiores a los descados. A pesar de un subregistro considerable, estimado en un 50 %, es posible establecer que el 30 % de estas muertes se deben a abortos, y el otro 30 % a toxemias y hemorragias. De cada cien mujeres que pierden la vida en nuestro país, sólo morirían 4 si vivieran en Canadá.

La mortalidad perinatal representa el 70 % de las muertes infantiles, y sus causas están relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, intervalos intergenésicos muy breves, embarazos no planificados, malas condiciones de salud de la madre, enfermedades infectocontagiosas, y condiciones socioeconómicas desfavorables.

El 75 % de estas muertes son evitables. Del 20 al 25 % del total de los nacimientos corresponden a embarazos de adolescentes. En nuestro país, 120.000 niños nacen cada año de madres menores de 19 años. El 35 % de ellos son el segundo o hasta el tercer hijo de estas madres. En el caso de las adolescentes, entre el 49 y el 50 % de muertes maternas es debido a abortos y es significativo el número de madres niñas. Sin lugar a dudas, estamos en presencia de un grupo de alto riesgo, al cual es urgente atender.

A pesar de no contar con registros oficiales, se calcula que se realizan en nuestro país entre 400.000 y 700.000 abortos anuales, es decir, tantos abortos como nacimientos. Se realizan 1.000 por día según datos muy cautelosos. Una mujer por día muere como consecuencia de abortos.

En la Argentina la primera causa de muerte materna son los abortos (30 %) y el segundo diagnóstico de egresos hospitalarios de mujeres entre 15 y 44 años, las condiciones postaborto.

El 30 % de las camas ginecológicas de los hospitales públicos son ocupados por mujeres que sufren complicaciones por abortos, provocando graves consecuencias, tanto en la salud física como psíquica.

Ante la carencia de acciones preventivas eficaces, el Estado se ve obligado a atender las consecuencias de dicha ausencia, provocando una inadecuada utilización de los recursos.

Existe amplio consenso entre los profesionales de la salud, acerca de que la única manera de prevenir los abortos y todas sus complicaciones es la implementación de programas que den curso a políticas preventivas beneficiando al conjunto de la población. Resulta realmente incomprensible que frente a la existencia de recursos adecuados y científicamente constatados para lograr el ejercicio de una procreación responsable se omita ponerlos a disposición de la población.

Una sociedad madura, moderna y democrática debe asumir esos temas incluyéndolos en la agenda política a través de la búsqueda de consensos y construcción pluralista. Todo esto dentro del marco de la responsabilidad ineludible del Estado en la toma de decisiones que transformen las declaraciones abstractas en realizaciones concretas.

Marcela A. Bordenave. — Diana B. Conti. — Enrique G. Cardesa. — Ramón H. Torres Molina. — Jorge Rivas. — Alfredo H. Villalba. — Aticia A. Castro. — Margarita H. Stolzner.

—A las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Familia, Mujer y Minoridad, de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda.

20

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

LEY DE DEFENSA A LA LIBERTAD DE INFORMACION AMBIENTAL

Artículo 1º — Es objeto de la presente ley, garantizar el libre acceso a la información ambiental que obre en poder de las administraciones nacional, provinciales, municipales y de los organismos descentralizados.

Art. 2º — Son sujetos de la presente, todas las personas físicas que posean el libre ejercicio de sus derechos civiles, así como las personas jurídicas con domicilio en el territorio de la nación, quienes no necesitan acreditar ni razones ni interés determinado, pudiendo además exigir resguardo de su identidad.

Art. 3º — A los fines de la presente ley y en cumplimiento del Pacto Federal Ambiental, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), actuará como organismo de coordinación y tendrá los siguientes objetivos:

- a) Arbitraré en los casos de conflictos administrativos interjurisdiccionales;
- b) Estableceré el mecanismo de gestión para cuando la información solicitada corresponda a la órbita de organismos de la administración nacional;
- c) Coordinaré políticas de difusión de la información receptada y para la transparencia en la gestión del ambiente;
- d) Centralizaré la información ambiental que se genere en las distintas jurisdicciones, la que pasará a integrar una base de datos nacional de libre acceso.

Art. 4º — Los gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con el régimen constitucional que posean, determinarán el organismo que, en sus respectivas jurisdicciones, actuará como autoridad de aplicación.

Art. 5º — Compete a la autoridad de aplicación:

- a) Establecer la mecánica de la gestión de la información ambiental en el ámbito de su juris-

dicción, entendida ésta desde la formalización de la solicitud hasta la entrega de información pedida;

- b) Gestionar ante la administración nacional cuando corresponda según el artículo 3º, inciso b), la solicitud de información ambiental demandada;
- c) Garantizar en el ámbito de su jurisdicción el cumplimiento de la presente ley;
- d) Elaborar un informe anual para ser remitido al organismo de coordinación;
- e) Evaluar el cumplimiento de los objetivos y políticas propuestas;
- f) Establecer la tasa a percibir para el suministro de la información, el que bajo ningún concepto podrá exceder de dos veces el costo total formado por el costo material más el costo laboral demandado;
- g) Podrá eximir del pago de la tasa del inciso que antecede, cuando la información sea solicitada para fines educativos o de investigación.

Art. 6º — Queda comprendida bajo la denominación de Información Ambiental, toda aquella información disponible en los ámbitos citados en el artículo 1º, bajo forma de expresión escrita, gráfica, oral, visual, magnética u otra, y bajo cualquier tipo de soporte material, que se refiera al estado general o particular de las aguas, el aire, el suelo, la fauna, la flora, las tierras, el ambiente natural y cultural y cualquiera de sus elementos, y sobre las actividades o medidas que les afecten o puedan afectarles, y sobre las medidas destinadas a protegerlas, incluidas las medidas administrativas y los programas de gestión.

Art. 7º — Los concesionarios de gestión de servicios públicos, sean éstos privatizados o estén en manos del Estado, están obligados a facilitar a los organismos de la administración titulares del servicio, toda la información ambiental que se les requiera, a los efectos de que estas últimas cumplan lo establecido en la presente ley.

Art. 8º — La autoridad de aplicación podrá denegar la información ambiental solicitada en los casos siguientes:

- a) Cuando la información solicitada esté expresamente protegida por ley en el sentido formal;
- b) Cuando la información solicitada afecte a la defensa nacional o a la seguridad del Estado.
- c) Cuando la información solicitada esté sujeta a condición de secreto de sumario en investigación de delitos mientras durare esta condición;
- d) Cuando la información solicitada pueda ser calificada como secreto industrial o secreto comercial, incluyendo la propiedad intelectual cuando ésta no cuente con la autorización de su titular.
- e) Cuando los datos solicitados afecten la confidencialidad de datos;
- f) Cuando la divulgación de los datos solicitados pudiera perjudicar el elemento del ambiente a que se refiere;